



Consejo Económico y Social

Distr.
GENERAL

E/CN.4/Sub.2/1994/NGO/38
24 de agosto de 1994

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones
y Protección a las Minorías
46° período de sesiones
Tema 8 del programa

LA REALIZACION DE LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Comunicación presentada por escrito por Coalición Internacional
Hábitat, Defensores de los Derechos Humanos, Disabled People's
International, Movimiento Internacional para la Unión Fraternal
entre las Razas y los Pueblos, Servicio Paz y Justicia en
América Latina y Sierra Club Legal Defense Fund,
organizaciones no gubernamentales reconocidas como
entidades consultivas (Categoría II) y por el
Consejo Indio de Sudamérica, Desarrollo Educativo
Internacional, Movimiento Internacional contra
Todas las Formas de Discriminación y Racismo y
la Organización Mundial contra la Tortura,
organizaciones no gubernamentales
incluidas en la lista

El Secretario General ha recibido la siguiente comunicación, que se distribuye con arreglo a la resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social.

[23 de agosto de 1994]

LA REALIZACION DE LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Y EL DERECHO AL DESARROLLO

1. Las organizaciones que presentan la comunicación desean señalar a la atención de la Subcomisión el empeoramiento de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo en los países del Tercer Mundo, debido en particular a las consecuencias desfavorables de las

políticas de las instituciones financieras internacionales y de los países industrializados. Reconocen también la labor realizada por la Comisión de Derechos Humanos y la Subcomisión para identificar los obstáculos y dificultades y las medidas que han de adoptarse a diversos niveles, dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas.

2. Las organizaciones que presentan la comunicación están preocupadas por el hecho de que los países que son Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros instrumentos pertinentes no han podido, pese a su voluntad política e intereses en muchos casos, acometer políticas de desarrollo y programas de bienestar para alcanzar el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, conforme a lo previsto en el Pacto. Dado que muchos de esos países se han visto obligados por esas instituciones, en particular el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a adoptar políticas económicas de libre mercado y programas de reconversión estructural, los pueblos de esos países han debido afrontar reducciones ingentes en los gastos sociales. La privatización, la inversión de proyectos de megadesarrollo y el reembolso y servicio de la deuda contribuyen también a absorber recursos que se necesitan para el desarrollo.

3. A fin de comprender la gravedad y seriedad de estos problemas, cabe indicar varios casos de diferentes países en los que los gobiernos se han visto obligados a elaborar y aplicar proyectos de desarrollo sin participación popular ni un acceso significativo a la información concerniente a los procesos de adopción de decisiones. Los gobiernos que dudan en aplicar tales políticas y programas dictados por el Banco Mundial/FMI se enfrentan con la amenaza de que se suspendan la asistencia y los préstamos para el desarrollo. Esto conduce a un aislamiento en el comercio y las transacciones comerciales, así como a embargos económicos y comerciales. Ahora bien, se experimenta ampliamente que ni el Banco Mundial ni el FMI han prestado la debida consideración a las obligaciones internacionales asumidas por un país en virtud de tratados ni a sus compromisos en materia de derechos humanos al elaborar y aplicar esos proyectos y otros programas. Por otra parte, esas instituciones, actúan como organizaciones fraternas de las Naciones Unidas, pero sin cumplir sus propósitos ni objetivos.

4. Tal vez sea pertinente tomar el ejemplo de Nepal para un estudio a fondo de esta cuestión. Nepal, uno de los países menos desarrollados, estableció un sistema de multipartidismo en 1990. Se hizo Estado Parte en varios instrumentos internacionales principales en materia de derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incluyó en su nueva Constitución políticas de igualdad y justicia económicas, así como servicios de bienestar social. Sin embargo, algunas políticas económicas y de desarrollo aplicadas por el Gobierno han sido objeto de crítica en el Parlamento y de protestas públicas. Esto ha conducido en ocasiones a una represión patrocinada por el Estado, muertes indiscriminadas en manifestaciones y otras violaciones de los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, el pasado mes, un grupo de unas 60 personas irrumpió, al parecer, en la oficina de la Comisión

Pública de Arun, órgano no gubernamental independiente que está celebrando audiencias sobre el controvertido proyecto hidroeléctrico Arun III, y forcejeó con los miembros de la Comisión. El grupo anunció seguidamente su propósito de irrumpir en la oficina del Instituto de Derechos Humanos, Medio Ambiente y Desarrollo (INHURED International), basado en Kathmandú, para agredir a sus funcionarios. Se ha amenazado también con perpetrar agresiones análogas contra miembros del Grupo de Intereses de Arun. En enero, el Director Ejecutivo y el Director de Programas del INHURED recibieron amenazas de muerte tras presentar una petición al Tribunal Supremo de Nepal para que se pusiera en conocimiento del público información relativa a Arun III, derecho garantizado en la Constitución y las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos. Si bien el Gobierno y la policía local fueron informados de estas amenazas y agresiones, no se adoptaron medidas debido al apoyo oficial al proyecto.

5. En una ocasión, a raíz del clamor nacional e internacional contra las injusticias cometidas por el Gobierno, el Primer Ministro de Nepal, que estaba furioso contra el Banco Mundial por dictar aumentos en las tarifas de la electricidad en Nepal y reducciones en otros servicios públicos, dijo: "Estoy algo decepcionado por el Banco Mundial, ya que unas veces dice una cosa y otras otra. Dice que prefiere que se mantenga la democracia en los países que reciben su ayuda, pero impone tales condiciones que pone en peligro democracias como la nuestra. Creo que no sabe muy bien lo que quiere" (Weekend, 28 de mayo de 1993 (Kathmandú)). La declaración del Primer Ministro es un ejemplo de cómo incluso un gobierno elegido democráticamente y dedicado a los derechos humanos puede fracasar en el logro de los derechos económicos y sociales.

6. La experiencia de Nepal en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales es la de que los modelos actuales de desarrollo impuestos por las instituciones financieras internacionales y los países industrializados son inadecuados, antidemocráticos e incompatibles con las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el proyecto hidroeléctrico propuesto Arun III, que ha de ser financiado por el Banco Mundial y otras fuentes, ha suscitado graves cuestiones acerca de sus consecuencias negativas sobre los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo, debido a las condiciones estipuladas por los prestamistas. La población de Nepal se ha visto privada de información sobre el proyecto (hasta que el Tribunal Supremo de Nepal dictó una decisión histórica contra el Gobierno acerca de esta cuestión) y de la oportunidad de conseguir una participación más amplia en el proceso de elaboración y aplicación. Se ha criticado ampliamente al proyecto y a los prestamistas por desatender las consecuencias desfavorables y por las condiciones fijadas, que reducirán todavía más los recursos existentes y futuros y las asignaciones presupuestarias en los sectores económico y social, por ejemplo, programas de bienestar, salud y vivienda. Además, hay una falta de contabilidad y transparencia y no existen planes concretos para la distribución equitativa de los beneficios que ha de producir el proyecto propuesto.

7. Según la información recibida de INHURED International, que ha venido planteando cuestiones sobre la realización eficaz de los derechos económicos, sociales y culturales con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en condiciones de constante amenaza física e intimidación, la población de Nepal jamás podrá lograr esos derechos si se lleva a cabo el proyecto en su configuración, alcance y condiciones de préstamo. En julio del presente año, se discutió en una reunión regional de organizaciones no gubernamentales en Kathmandú las consecuencias de los programas de reconversión estructural en los países del sudeste asiático y se llegó a la conclusión de que los niveles de vida y los logros sanitarios y docentes de las poblaciones más numerosas del mundo están disminuyendo espectacularmente. Se determinó que el Banco ha venido violando sus propias políticas y procedimientos de información y operación al elaborar y financiar proyectos, incluidas la adquisición, indemnización y rehabilitación de las personas y comunidades afectadas. Por ejemplo, se ha violado, en relación con el proyecto Arun III, la Directriz Operacional 4.30 del Banco sobre reasentamiento involuntario, según la cual uno de sus objetivos principales es el de "proporcionar a las personas desplazadas por un proyecto los medios de mejorar, o por lo menos de restablecer sus anteriores niveles de vida, capacidad de generación de ingresos y niveles de producción" (art. 2). Ahora bien, las personas afectadas están siendo indemnizadas a tasas inferiores al precio del mercado de su tierra. Análogamente el Banco propugna firmemente una indemnización "tierra por tierra" que es especialmente importante en el valle de Arun, donde los habitantes no están vinculados a la economía monetaria y donde se han puesto ya de relieve graves problemas debido a las medidas de indemnización en efectivo.

8. En cuanto Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los gobiernos tienen obligaciones internacionales de garantizar la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales de sus pueblos adoptando políticas y programas que sean compatibles con las disposiciones de los tratados, incluidos el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto. Asimismo no se ha tomado en consideración la cultura local de la población del valle de Arun, que está integrada en su mayor parte por grupos étnicos tradicionales, en la construcción propuesta del proyecto, que dependerá de mano de obra extranjera y no local, con lo que habrá un ingente aflujo de personal externo a una región aislada del país. El párrafo 2 del artículo 15 del Pacto establece la obligación de los Estados Partes de adoptar las medidas necesarias para la conservación y desarrollo de tal cultura.

9. En conclusión, los programas de reconversión estructural y las condiciones vinculadas a proyectos de desarrollo como el de Arun III tienen efectos negativos sobre esos derechos en todo el mundo. Esas políticas obstaculizan gravemente el "derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales" previsto en el artículo 25 del Pacto.

10. Las organizaciones que presentan la comunicación instan a la Subcomisión a que pida:

a) que las instituciones financieras internacionales, en cuanto parte del sistema de las Naciones Unidas:

- i) cumplan todos los instrumentos internacionales de derechos humanos al elaborar y financiar cualquier proyecto;
- ii) examinen todas las condiciones de los préstamos y los efectos de los programas de reconversión estructural a fin de cumplir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo;
- iii) faciliten toda la documentación e información relativas al proyecto a las organizaciones no gubernamentales, a las personas afectadas y al público;
- iv) garanticen que las medidas que adopten en relación con los proyectos y sistemas de financiación no menoscaben los procedimientos democráticos internos;
- v) permitan que los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas investiguen el cumplimiento de las políticas, procedimientos, directrices y normas concernientes a proyectos y obligaciones de un organismo de préstamo y un país prestatario; y
- vi) respeten el derecho de los pueblos a disfrutar y disponer libremente de sus recursos nacionales;

b) que el Gobierno de Nepal:

- i) cumpla sus compromisos y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al concertar acuerdos de préstamo con todos los prestamistas y donantes bilaterales y multilaterales;
- ii) examine las políticas económicas y proyectos de desarrollo existentes, incluido el proyecto Arun III, para cerciorarse de que la elaboración y financiación de los proyectos no reducirá los recursos actualmente disponibles en los sectores económico y social y las actividades culturales, y que los beneficios de esos proyectos se distribuirán por igual a toda la población de Nepal para la eficaz realización de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo.

11. Las organizaciones que presentan la comunicación instan también a la Subcomisión a que realice estudios de seguimiento de las consecuencias de las políticas y programas de las instituciones financieras internacionales sobre la base de casos y experiencias de países y que formule recomendaciones para la vigilancia de estas cuestiones por los órganos de las Naciones Unidas encargados de los derechos humanos.
